



Resolución de Superintendencia

N° 382 -2017-SUCAMEC

Lima, 09 MAY 2017

VISTOS: El Recurso de Apelación interpuesto el 05 de abril de 2017, por el señor Moisés Salomón Estrada Fernández contra la Resolución de Gerencia N° 1199-2017-SUCAMEC-GAMAC de fecha 21 de marzo de 2017, de la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos; el Dictamen Legal N° 172-2017-SUCAMEC-OGAJ de fecha 04 de mayo de 2017, emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1127, se creó la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC, como Organismo Técnico Especializado adscrito al Ministerio del Interior, con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía administrativa, funcional y económica en sus funciones;

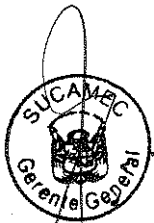
Que, la facultad de contradicción contemplada en el numeral 215.1, artículo 215, del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que frente a un acto administrativo que viola, desconoce o lesiona un derecho e interés legítimo recurrido por parte de los administrados procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos; asimismo, el numeral 216.1, del artículo 216, establece que los recursos administrativos son: Recurso de Reconsideración y Recurso de Apelación, y el numeral 216.2, dispone que el plazo para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días;

Que, el artículo 218 del referido cuerpo legal, dispone que: *“El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas ofrecidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho [...]”*;

Que, asimismo, el numeral 11.1, artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, dispone que: *“Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley”*; asimismo, el numeral 11.2, indica que la nulidad planteada por medio de un recurso de reconsideración o de apelación será conocida y declarada por la autoridad competente para resolverlo, y el numeral 11.3 estipula que *“La resolución que declara la nulidad dispone, además, lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido, en los casos en que se advierta ilegalidad manifiesta, cuando sea conocida por el superior jerárquico”*;

Que, mediante Expediente N° 201600309433 de fecha 06 de setiembre de 2016, el señor Moisés Salomón Estrada Fernández (en adelante, el administrado) solicitó a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (en adelante, SUCAMEC), la renovación de Licencia de posesión y uso de arma de fuego en la modalidad de defensa personal, respecto de la pistola marca BERSA con serie N° A74670, bajo el procedimiento especial de regularización de licencias vencidas;

Que, a través de la Resolución de Gerencia N° 10833-2016-SUCAMEC-GAMAC de fecha 28 de noviembre de 2016, la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos (en adelante, GAMAC) desestimó la solicitud presentada por el administrado, toda vez que no ha cumplido con la condición necesaria para la renovación solicitada, conforme señala el numeral 7.1, artículo 7, del Reglamento de la Ley N° 30299, aprobado con Decreto Supremo N° 008-2016-IN;



V⁴B[°]
E Paz



Que, posteriormente, el día 23 de diciembre de 2016, el administrado presentó Recurso de Reconsideración contra la Resolución de Gerencia N° 10833-2016-SUCAMEC-GAMAC, el mismo que fue desestimado a través de la Resolución de Gerencia N° 1199-2017-SUCAMEC-GAMAC de fecha 21 de marzo de 2017;

Que, con fecha 05 de abril de 2017, el administrado interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución de Gerencia N° 1199-2017-SUCAMEC-GAMAC, a fin de que se declare nula la resolución cuestionada y reformándola se declare procedente su pedido de renovación de licencia de uso de arma de fuego, ya que esgrime principalmente que no pudo adjuntar a su recurso de reconsideración los medios probatorios pertinentes, sin embargo en el presente recurso adjunta las pruebas que evidencian que no cuenta con antecedentes por delito doloso, tales como: Certificado Judicial de Antecedentes Penales N° AH 0886070 RNC, Certificado de Antecedentes Judiciales N° 16-0302236, Antecedentes Judiciales N° 031, Certificado de Antecedentes Policiales, Constancia emitida por el Jefe de Registro Penitenciario del Penal de Chincha; asimismo, argumenta que dadas las actividades empresariales de sus hermanos, toda su familia vienen siendo extorsionada y amenazada de muerte, y teniendo en consideración que la provincia de Pisco esta cada día más insegura, se le hace indispensable la renovación de su licencia para portar arma de fuego a fin de salvaguardar su integridad personal, física y la de su familia;

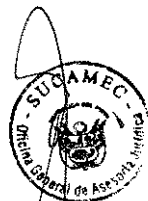
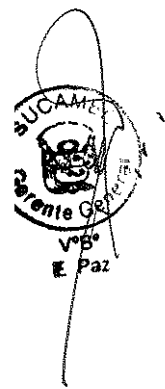
Que, sobre la normatividad reglamentaria vigente, observamos que mediante Decreto Supremo N° 010-2017-IN se aprobó el nuevo Reglamento de la Ley N° 30299, Ley de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos, Productos Pirotécnicos y Materiales Relacionados de Uso Civil, el cual entró en vigencia el 02 de abril de 2017, y como consecuencia de ello, derogó el Decreto Supremo N° 008-2016-IN; sin embargo, en aplicación del Principio de Temporalidad de las Leyes, previsto en el artículo 103 de nuestra Constitución, para efectos de resolver el presente recurso administrativo, será de aplicación esta última normativa;

Que, el artículo 9, del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, consagra de manera expresa en nuestro ordenamiento administrativo, la presunción de validez de los actos administrativos, conforme al cual todo acto se considera válido, en tanto su pretendida nulidad, no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda;

Que, la expresión del "debido proceso" en sede administrativa se sustenta en el principio del Debido Procedimiento, recogido en el numeral 1.2 del Artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, que prescribe: *"Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada y fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten [...]"*;

Que, la Ley N° 30299, Ley de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos, Productos Pirotécnicos y Materiales relacionados de Uso Civil, en su artículo 7, literal b), establece que para obtener y renovar las licencias o autorizaciones otorgadas conforme a la citada Ley, las personas naturales o los representantes legales de las personas jurídicas deben cumplir, entre otras, con la siguiente condición: *"b) No haber sido condenado vía sentencia judicial firme por cualquier delito doloso, aun en los casos en que el solicitante cuente con la respectiva resolución de rehabilitación por cumplimiento de condena"*;

Que, el numeral 7.1 del artículo 7 del Reglamento de la Ley N° 30299, establece como condición para la obtención y renovación de licencias y autorizaciones: *"No contar con antecedente penal por delito doloso se refiere a que el solicitante de una autorización o licencia ante la SUCAMEC, **no debe figurar en el registro nacional histórico de condenas del Poder Judicial***





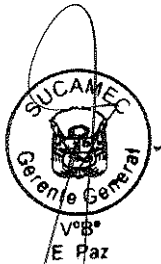
Resolución de Superintendencia

por este tipo de delitos. Conforme lo dispone el literal b) del artículo 7 de la Ley, la rehabilitación regulada por los artículos 69 y 70 del Código Penal no resulta aplicable para la evaluación y consultas a cargo de la SUCAMEC" (Resaltado y subrayado agregado); asimismo, el artículo 42 del precitado Reglamento, refiere que "la SUCAMEC deniega o desestima la solicitud de licencia de uso de arma de fuego cuando el solicitante no cumpla con las condiciones o requisitos establecidos en la Ley y el presente Reglamento";

Que, al respecto, la Oficina General de Asesoría Jurídica, a través del Dictamen Legal N° 172-2017-SUCAMEC-OGAJ de fecha 04 de mayo de 2017, en forma preliminar, señala que la solicitud presentada por el administrado se encuentra enmarcada en la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley N° 30299 aprobado con Decreto Supremo N° 008-2016-IN, referente al Procedimiento de regularización de licencias vencidas, para los usuarios que a la entrada en vigencia de la Ley tengan su licencia o licencias vencidas puedan realizar el canje automático de las mismas por la Licencia única y puedan obtener la respectiva Tarjeta de propiedad. Asimismo, precisa que la Licencia de posesión y uso de arma de fuego N° 362319 (actualmente caducada), fue evaluada y otorgada al amparo de la Ley N° 25054 y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 007-98-IN;

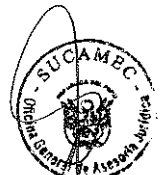


Que, en este contexto, indica que la solicitud presentada por el administrado, fue ingresada a trámite a través del Expediente N° 201600309433 de fecha 06 de setiembre de 2016, registrando como marco legal para su aprobación, la Ley N° 30299, vigente a partir del 06 de julio de 2016, la cual derogó la Ley N° 25054 y abrogó su Reglamento; por tanto, en aplicación del Principio de Temporalidad de las Leyes, previsto en el artículo 103 de nuestra Constitución, se debe utilizar la Ley N° 30299 y su Reglamento, toda vez que las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes se registran durante la vigencia de la Ley N° 30299;



Que, en adición a lo precedido, señala que luego de la verificación a la documentación contenida en el presente expediente administrativo, se observa en el Oficio N° 70925-2016-B-WEB-RNC-GSJR-GG emitido por el Jefe del Registro Nacional Judicial con fecha 04 de noviembre de 2016, que el administrado cuenta con antecedente en el registro nacional histórico de condenas del Poder Judicial por delito doloso, a raíz de la sentencia condenatoria impuesta por el 2° Juzgado Penal de Pisco con fecha 04 de enero de 2002 (Expediente N° 01-188), por Delito – Lesiones Graves, con pena regulada de cuatro (4) años;

Que, en ese orden de ideas, al determinarse que el administrado figuraba en el citado registro nacional histórico de condenas, la solicitud presentada incumplió el numeral 7.1, artículo 7, del Reglamento de la Ley N° 30299, el cual dispone como condición para la renovación de la Licencia para portar arma de fuego bajo cualquier modalidad, que el solicitante no cuente con antecedente penal por delito doloso, es decir no debe figurar en el registro nacional histórico de condenas del Poder Judicial por este tipo de delitos, por consiguiente, al no proceder la renovación de Licencia de posesión y uso N° 362319, no corresponde el otorgamiento de Tarjeta de propiedad al administrado; en este sentido, la GAMAC declaró correctamente desestimada la solicitud presentada, con Resolución de Gerencia N° 10833-2016-SUCAMEC-GAMAC, en aplicación estricta del principio de Legalidad (numeral 1.1, del Artículo IV, del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444), el cual refiere que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de sus facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines conferidos; por tanto, no se advierten vicios u omisiones que configuren nulidad de la precitada resolución gerencial;



Que, con respecto al argumento esbozado por el administrado, referente a que "no pudo adjuntar a su recurso de reconsideración los medios probatorios pertinentes, sin embargo en el presente recurso adjunta las pruebas que evidencian que no cuenta con antecedentes por delito doloso, tales como: Certificado Judicial de Antecedentes Penales N° AH 0886070 RNC, Certificado de Antecedentes Judiciales N° 16-0302236, Antecedentes Judiciales N° 031, Certificado de Antecedentes Policiales, Constancia emitida por el Jefe de Registro Penitenciario del Penal de

Chincha”; cabe precisar que si bien es cierto que la rehabilitación (regulada en los artículos 69 y 70 del Código Penal) dispone que luego de cumplir la correspondiente sentencia condenatoria se le devuelven al condenado sus derechos suspendidos o restringidos por dicha condena, lo cual concuerda con lo verificado en las instrumentales presentadas, las cuales indican que el administrado no registra actualmente antecedentes penales, judiciales o policiales, sin embargo también es cierto que el efecto jurídico posterior al cumplimiento de toda sentencia condenatoria, no es causal eximente para no acatar la condición estipulada en el numeral 7.1, artículo 7 del Reglamento de la Ley N° 30299, referente a que el solicitante de renovación de Licencia de portar arma no debe figurar en el registro nacional histórico de condenas del Poder Judicial por haber cometido delito doloso;

Que, en contraposición a lo alegado en el extremo referido a que *“dadas las actividades empresariales de sus hermanos, toda su familia vienen siendo extorsionada y amenazada de muerte, y teniendo en consideración que la provincia de Pisco esta cada día más insegura, se le hace indispensable la renovación de su licencia para portar arma de fuego a fin de salvaguardar su integridad personal, física y la de su familia”*, debemos indicar, que el espíritu de la norma no busca el desamparo o la indefensión del ciudadano frente a los actos delincuenciales u otros eventos de inseguridad, lo que resguarda dicha norma es un carácter preventivo ante la simple existencia de una exposición a ser objeto de hechos delictivos, tutelando en forma adecuada la garantía preventiva constitucional, como es la “legítima defensa”, el cual es un “estado de necesidad” vinculado a la defensa de cualquier derecho, ya sea personal o patrimonial; no obstante, lo expuesto, cabe resaltar, que el uso y posesión de un arma de fuego no es un derecho inherente a la persona, puesto que el mismo es prerrogativa del Estado, siendo representado por la SUCAMEC, en el marco de sus competencias y requisitos establecidos por Ley;

Que, por otra parte, dicho dictamen señala que el numeral 22.6, artículo 22, de la Ley N° 30299, establece que la SUCAMEC en el ejercicio de sus potestades de control, fiscalización o sanción, dispondrá la cancelación o suspensión de licencias de uso de armas de fuego, por cualquiera de las siguientes causales sobrevinientes a su otorgamiento: 1) Por infracciones a la presente Ley y el reglamento; 2) Incumplir algunas de las condiciones establecidas en el artículo 7 de la presente Ley; y, 3) Cuando el titular de la licencia haga uso indebido del arma o afecte el orden interno, la seguridad ciudadana y personal, la propiedad pública o privada;

Que, adicionalmente a ello, indica que en aplicación del principio de Razonabilidad, establecido en el numeral 1.4, artículo IV, Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, la Autoridad Administrativa (en este caso, la SUCAMEC) cuenta con la obligación y la prerrogativa para que sus decisiones se adapten dentro de los límites de las facultades atribuidas siempre que mantenga la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos a tutelar; en este sentido, teniendo en cuenta que los hechos pasibles de sanción son irrefutables (registro histórico de sentencia condenatoria impuesta por el 2º Juzgado Penal de Pisco con fecha 04 de enero de 2002 en contra del señor Moisés Salomón Estrada Fernández), basta la verificación de los hechos para que se imponga la medida administrativa previamente establecida en el numeral 22.6, artículo 22, de la Ley N° 30299;

Que, estando a lo expuesto en el Dictamen Legal N° 172-2017-SUCAMEC-OGAJ, corresponde declarar desestimado el Recurso de Apelación contra la Resolución de Gerencia N° 1199-2017-SUCAMEC-GAMAC; asimismo, conforme establece el numeral 6.2, artículo 6, del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, el precitado dictamen debe ser notificado en forma conjunta con el acto administrativo que resuelve el presente recurso;

Con el visado del Jefe (e) de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del Gerente General;





Resolución de Superintendencia

De conformidad con las facultades conferidas en el Decreto Legislativo N° 1127, Decreto Legislativo que crea la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, y el Decreto Supremo N° 004-2013-IN, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, modificado por Decreto Supremo N° 017-2013-IN;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar desestimado el Recurso de Apelación interpuesto por el señor Moisés Salomón Estrada Fernández contra la Resolución de Gerencia N° 1199-2017-SUCAMEC-GAMAC de fecha 21 de marzo de 2017, emitida por la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos, dándose por agotada la vía administrativa.

Artículo 2°.- Dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos cuarto, quinto y sexto de la Resolución de Gerencia N° 1199-2017-SUCAMEC-GAMAC.

Artículo 3°.- Publicar la presente resolución en el Portal Institucional de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC (www.sucamec.gob.pe).

Artículo 4°.- Notificar la presente resolución al interesado así como el Dictamen Legal N° 172-2017-SUCAMEC-OGAJ, y poner de conocimiento de la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos para los fines correspondientes.

Regístrese y comuníquese.


RUBEN ORLANDO RODRIGUEZ RABANAL
Superintendente Nacional
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad,
Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC

